



Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NÚM. 251.

Real orden recordando el puntual cumplimiento de la de 12 de agosto de 1857, dictada con el fin de reprimir con mano fuerte todo género de blasfemias.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino en Real orden de 16 del actual me dice lo que sigue.

Por Real orden-circular de 12 de agosto de 1857, dictada á fin de reprimir y castigar con arreglo á las leyes los excesos que con frecuencia se cometían en las calles y sitios mas públicos, profiriéndose todo género de frases deshonestas, imprecaciones y blasfemias, se previno á los Gobernadores de las provincias que encargasen especialmente á sus subordinados que entregaran los autores de aquellos delitos á los tribunales de justicia; y si bien aquella soberana resolución produjo entonces los efectos apetecidos, S. M., en vista de los nuevos aunque menos frecuentes abusos que se cometen de la misma índole, y teniendo en cuenta la solemnidad y santidad propias de los actuales días, ha tenido á bien disponer que se recuerden á V. S. las referidas prevenciones para que tengan el mas exacto y eficaz cumplimiento.

De Real orden lo digo á V. S.

para su inteligencia y fines expresados.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para su mas exacto y puntual cumplimiento por parte de los Alcaldes de la provincia, á quienes encargo de la manera mas eficaz la religiosa observancia, en todos los casos, de lo dispuesto por S. M. en la Real orden antecedente, procediendo contra los autores de semejantes desacatos en la forma prevenida en la Real orden de 12 de agosto de 1857 que antes se cita, inserta en el Boletín número 99 de aquel año; en la inteligencia de que me será penoso tener que recordar á los Alcaldes sus deberes en una cuestion que tanto afecta á la moralidad pública y á los objetos de mayor veneracion para todo pueblo católico. Orense abril 25 de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Gutierrez.

TERCERA SECCION.

Número 252.

En la Gaceta de Madrid núm. 54 del miércoles 23 de febrero último se les lo siguiente:

Resolviendo un expediente de competencia entre el Gobernador de Granada y el señor Juez de primera instancia de San Salvador.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES DECRETOS.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Granada y el Juez de primera instancia del distrito de San Salvador de su capital, de los cuales resulta:

Que el Ayuntamiento de Monachil, en vista de que José Martín Beltrán, como colono del cortijo llamado de Guenez, de aquella jurisdicción, interrumpía el curso de las aguas de las acequias de la Umbría y de los Llanos, contra la costumbre que de tiempo inmemorial estaba en uso para el aprovechamiento del riego, y considerando que se iban á causar perjuicios á las propiedades y labores que hasta entonces habian disfrutado del aprovechamiento y que Martín trataba de anular un derecho procomunal, acordó en 6 de junio de

1858, dando cuenta al Gobernador de la provincia, comisionar al Alcalde y Síndico para que pasando al punto de la novedad, pusieran las cosas en el estado que de antiguo tenían, y previnieran á los colonos del referido cortijo que en lo sucesivo, y bajo su responsabilidad, no interrumpieran el curso de las indicadas aguas.

Que el día 8 del mismo mes acudió Don Cristóbal de Castro y Pisa al Juez de primera instancia del distrito diciendo, que estando en posesion del cortijo y tierras de Guenez y del aprovechamiento de varias fuentes que allí nacen, entre ellas la de Bugo, se solicitó el año anterior, á nombre de los hacendados y labradores del pago de la Umbría, que permitiera llevar las aguas de la mencionada fuente para regar sus frutos pendientes á cuya petición accedió, á condicion de que la hicieran por escrito; mas al ver que prescindiendo de este requisito, abrieron la acequia, mandó cerrarla, y así se ejecutó sin contradicción ni reclamacion alguna; y finalmente, que hallándose en tal estado las cosas, el día 7 del mencionado junio se habia constituido en las tierras del cortijo de su propiedad D. José de Illitos con varios labradores del pago de la Umbría, quienes abrieron la acequia, arrojando el fruto de trigo pendiente, y condujeron por ella las aguas de la referida fuente del Bugo para regar aquel pago, por todo lo cual interponia el correspondiente interdicto pidiendo que se sustanciara sin audiencia del despojante ó despojantes, previa la fianza que la ley señala.

Que acordado así, y recibida la informacion que se presentó de tres testigos, que convinieron en los hechos expuestos, recayó auto restitutorio el día 9 del propio junio, que fué llevado á efecto; y el Gobernador de la provincia enterado por el Ayuntamiento, aprobó el acuerdo de este del día 6 y pidió informe al Juez, poniendo en su conocimiento todos los antecedentes oficiales del asunto.

Que en vista de lo manifestado por el Juez, el Gobernador procedió á formar expediente, en que aparece en las informaciones periciales y ademas en las declaraciones recibidas á seis testigos por el Juez de paz de Monachil, que la acequia de la Umbría, que surte de aguas á este pueblo y su término, aumentaba su caudal con los sobrantes de la fuente del Bugo, para lo cual de antiguo existe un cauce que las conduce desde el cortijo de Guenez hasta la acequia expresada; que si bien los labradores del cortijo desde tiempo atrás iban aumentando la roturación de sus terrenos, siempre habian respetado el cauce, y aunque hacia pocos años, cuatro, al decir de un testigo, que roturaron el sitio por donde pasaban las aguas, fué

sin privar de todo punto la corriente á la Umbría; y finalmente, segun afirmacion de dos testigos que Castro quiso que el Alcalde le pasara un oficio pidiéndole el agua, y como este no accedió para no perjudicar los derechos comunales, interrumpió Castro de todo punto la corriente;

Que el Gobernador, oido el Consejo provincial, promovió y sostuvo la presente competencia, durante cuya tramitacion acordó el Ayuntamiento y llevó á efecto el Alcalde la reposicion de las cosas al ser y estado que tenían antes de alterar el curso de las aguas los labradores del cortijo de Guenez, en razon de hallarse en extremo necesitadas de riego las producciones pendientes, en medio de la notoria escasez que aquejaba al país; acto que fué sostenido por el Gobernador, fundándose en que la suspension de procedimientos que previene el art. 7.º del Real decreto de 4 de junio de 1847, una vez suscitada la competencia, se refiere á la Autoridad judicial, habiéndose hecho extensiva en la práctica á la Administracion por via de equidad, pero solo en el caso de consentirlo la materia de que se trata;

Visto el art. 74, párrafos segundo y quinto de la ley de 8 de enero de 1845, en que se encarga al Alcalde el cuidado de la conservacion de los bienes comunales, y de todo lo relativo á la policia urbana y rural, conforme á las leyes, los reglamentos y disposiciones de la Autoridad superior y ordenanzas municipales;

Visto el art. 80, párrafo segundo de la misma ley, que consigna entre las atribuciones de los Ayuntamientos la de arreglar por medio de acuerdos, conformándose con las leyes y los reglamentos, el disfrute de los pastos, aguas y demas aprovechamientos comunes, en donde no haya un régimen especial autorizado competentemente;

Visto el art. 8.º, párrafo primero, y el art. 9.º de la ley de 2 de abril de 1845, que atribuyen á los Consejos provinciales el conocimiento de las cuestiones relativas al uso de los aprovechamientos comunales y á todo lo contencioso de los diferentes ramos de la Administracion civil, para lo cual no establezcan las leyes Juzgados especiales;

Vista la Real orden de 8 de mayo de 1839, que prohibe á la Autoridad judicial dejar sin efecto, por medio de interdictos, los acuerdos de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de sus atribuciones legítimas;

Considerando:

1.º Que el acuerdo del Ayuntamiento de Monachil de 6 de junio de 1858 ha sido dictado dentro de las atribuciones que consignan á la Autoridad municipal los

Dado en Palacio a 6 de abril de 1859
— Está rubricado de la Real mano —

El Ministro de Fomento, Rafael de Bustos y Castilla.

Ilmo. Sr.: Accediendo S. M. la Reina (Q. D. G.) á lo solicitado por don Pío de la Puente, vecino de esta corte, ha tenido á bien autorizarle por el término de un año para verificar los estudios de un canal de navegación y riego, que ponga en comunicación los ríos Ebro y Duero, partiendo de Atanda y R. a, siguiendo por Olmedillo, Torresandino, Villahoz, Santa María del Campo, los Balhases, Castrejón, Villadiego y terminando en el valle de Manzanaedo, provincia de Burgos; entendiéndose que esta autorización no le da derecho á que se le otorgue la concesión definitiva, si no se estima procedente, ni á indemnización de ningún género por los trabajos que practique. De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de abril de 1859.—Corvera.—Sr. Director general de Obras públicas.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) en vista de los informes emitidos por el Gobernador civil, Ingeniero Jefe y Consejo provincial de Ciudad-Real, acerca del ante-proyecto de la carretera de Villamayor á Almodóvar del Campo, y conformándose con el dictamen de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, se ha servido declarar de tercer orden dicha carretera.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de abril de 1859.—Corvera.—Sr. Director general de Obras públicas.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) en vista de los informes emitidos por el Gobernador, Ingeniero Jefe y Consejo provincial de Oviedo, acerca del ante-proyecto de la carretera que desde Luarca y pasando por el Estopo, Naraval, Navalgas y Tineo, va á empalmar en las inmediaciones de esta villa con la de la Venta de Melendreras y Luarca; y conformándose con el dictamen de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, se ha servido declarar de tercer orden dicha carretera.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de abril de 1859.—Corvera.—Sr. Director general de Obras públicas.

Concediendo á don Matías Gomez Villaboa autorización para la construcción de un canal de riego que fertilice varios pueblos de la provincia de Leon y Zamora.

Visto el resultado del expediente promovido por don Matías Gomez Villaboa, vecino de esta corte, para la construcción de un canal de riego que, derivado del río Esla, fertilice los terrenos de varios pueblos de las provincias de Leon y Zamora:

Considerando que en la instrucción dada á dicho expediente se han observado todas las prescripciones contenidas en la ley de 17 de julio de 1836 sobre expropiación forzosa; en la Real instrucción de 10 de octubre de 1845 para promover y ejecutar las obras públicas; y en la Real orden de 14 de marzo de 1846 sobre aprovechamiento de aguas:

Teniendo presente el informe favorable evacuado por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, en la parte facultativa del proyecto:

Y conformándose con lo propuesto por mi Ministro de Fomento, tengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se autoriza á D. Matías Gomez Villaboa para construir un canal de riego que, derivado del río Esla y recorriendo una línea de 40 kilómetros y 361 metros, sobre una superficie regable de 55,900 fanegas del país, ó sean 9,226

hectáreas, fertilice los términos de San Millán, Villademor, Toral, Agadefe, Villarabines, Villamandos, Villaquejida, Cimanes, Barriones y Lordemianos, en la provincia de Leon, y los de San Miguel del Valle, Santa Colomba, San Cristóbal, Benavente y Villanueva de Azuague, en la de Zamora.

Art. 2.º El concesionario ejecutará las obras con arreglo al proyecto formado por el Director de Caminos vecinales don Dionisio Lago, cuyo presupuesto asciende á 2.500.000 rs., sujetándose además á las condiciones contenidas en el pliego adjunto, aprobado por Mi. con esta fecha.

Art. 3.º Accediendo á los deseos que Me ha manifestado el referido don Matías Gomez Villaboa, le concedo la gracia de que el canal lleve el título de mi augusto hijo el Príncipe de Asturias.

Dado en Palacio á 6 de abril de 1859. Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento, Rafael de Bustos y Castilla.

CONDICIONES bajo las cuales se autoriza á don Matías Gomez Villaboa, vecino de esta corte, para construir un canal de riego, derivado del río Esla en la provincia de Leon, titulado del PRÍNCIPE DE ASTURIAS, en virtud de lo dispuesto en Real decreto de fecha de hoy.

1.º Se declaran de utilidad pública las obras del Canal del Príncipe de Asturias para los efectos de expropiación forzosa de los terrenos, edificios, artefactos y demás que sea necesario ocupar ó inutilizar para la construcción del acueducto y acequias de riego y aprovechamiento de los saltos de agua que el mismo proporcione.

2.º Las obras se ejecutarán con entera sujeción al proyecto aprobado con esta fecha, tomándose la derivación del Canal en el punto de salida de las aguas del molino de don Isidro Baeza, situado en término de Villamañán y después de haber servido para el movimiento de dicho artefacto.

3.º El concesionario no podrá llevar al Canal mayor cantidad de agua que la que pueda derivarse del río Esla por el puerto ó presa y acequia del molino de Baeza, sin elevar el nivel de aquella; y el maximum de esta cantidad nunca podrá exceder de 500 pies cúbicos por segundo, ó sean 6,480 litros en igual tiempo.

4.º En el caso de que para cubrir este maximum fuera preciso derivar mas agua que la que hoy toma la presa referida, y con ello se perjudicase el movimiento del molino, deberá el concesionario indemnizar al dueño del mismo, á menos que este prefiera que se haga uso del derecho de expropiación concedido por la condición 1.ª

5.º El concesionario se obliga á costear la reparación y conservación del puerto y acequia del molino de Baeza en los términos en que ambos convinieren. Si no pudieran avenirse, ó el dueño del molino prefiriese la indemnización del valor de las obras y artefacto, tendrá lugar la expropiación y pasarán aquellas y este á ser propiedad del concesionario.

6.º Se obliga igualmente á dejar expedito el curso del agua por la acequia de los molinos titulados de Valencia de don Juan, y á cuidar de la reparación y conservación de la misma, satisfaciéndole los dueños de dichos molinos el cánón anual en que se convinieren por el mayor beneficio que reportan de tener asegurado el movimiento de los artefactos, y evitarles la construcción de un nuevo puerto. Tanto ellos, sin embargo, como el concesionario, podrán optar por la expropiación.

7.º El concesionario, ó quien le represente, disfrutará del Canal y de todos sus aprovechamientos por el tiempo de 99 años, terminados los cuales pasará al Estado en plena propiedad, debiendo verificarse la entrega en perfecto estado de conservación. Para garantir esta en-

trega se intervendrán por el Gobierno y quedarán en depósito, los productos del Canal en los cuatro años últimos de la concesión.

8.º Se exceptúan de la reversion al Estado los saltos de agua que proporcione el Canal y utilice el concesionario durante los 99 años de la concesión, los cuales se adjudican á dicho concesionario en plena y perpetua propiedad. Se advierte, sin embargo, que siendo el riego el principal objeto de esta concesión, deberá interrumpirse el servicio de los saltos, siempre que el riego lo reclame.

9.º El concesionario se obliga á construir las acequias maestras ó brazos principales de riego en los puntos que se reputen mas á propósito, y á poner en ellos la cantidad de agua suficiente para satisfacer los pedidos que voluntariamente le hagan los propietarios de las tierras situadas en la zona regable. La construcción de las acequias para conducir el agua desde las acequias maestras á los campos será de cuenta de los que soliciten el riego, los cuales pagarán además al concesionario el cánón en que se convengan mutuamente, y que no podrá exceder del siguiente maximum.

Para las tierras dedicadas al cultivo de cereales, por 2,600 metros cúbicos de agua en cuatro riegos, 5 rs. por riego y fanega del país, ó sean 77 rs. 81 cént. por hectárea.

Para la de cereales, lineras y legumbres, por 3,900 metros en seis riegos, 116 rs. 72 cént. por hectárea.

Para las destinadas á prados, por 5,200 metros en ocho riegos, 155 rs. 63 cént. por hectárea.

Y para las huertas, por 15,000 metros en 20 riegos, 389 rs. 8 cént. por hectárea.

El maximum de este cánón queda sujeto á revision de diez en diez años, á instancia de los regantes ó del concesionario, para disminuirlo ó aumentarlo, según proceda.

10. A proporcion que así lo exija el incremento del riego, á juicio de los Gobernadores de las respectivas provincias, ó á petición de los interesados, el Gobierno establecerá cuatro sindicatos, dos en la provincia de Leon, á saber: uno en Toral de los Guzmanes, para los términos de San Millán, Villademor, Toral, Agadefe, Villarabines y Villamandos; y otro en Villaquejida, para los de este pueblo, Cimanes, Barriones y Lordemandos; y dos en la provincia de Zamora, á saber: uno en San Cristóbal, para los términos de San Miguel, Santa Colomba y San Cristóbal; y otro en Benavente, para los de este pueblo y Villanueva de Azuague. Estos sindicatos se crearán bajo la base de los del Canal Imperial, con las modificaciones que el Gobierno estime, y tendrán á su cargo el régimen y distribución de las aguas y la recaudación del cánón. Entretanto no se verifique su creación, el concesionario se entenderá directamente con los particulares interesados en el riego.

11. El concesionario deberá respetar y dejar expeditos los riegos existentes, así como los pasos de carreteras, caminos, sendas, veredas y demás servidumbres que hubiese de cruzar el Canal.

12. No podrá proceder á la ejecución de ninguna obra de fábrica de las que no consten en los planos, sin que previamente se presenten á la aprobación del Gobierno los proyectos y presupuestos convenientemente detallados.

13. Las obras deberán principiarse dentro de los seis meses siguientes á la fecha de la concesión, y dejarse terminadas á los ocho años.

14. Todas las obras se ejecutarán bajo la inspección del Ingeniero Jefe de la provincia, ó del que el Gobierno tenga por conveniente nombrar al efecto, siendo del cargo del concesionario el abono de las indemnizaciones que derengue con sujeción á los reglamentos vigentes.

15. El concesionario disfrutará de

los derechos y privilegios concedidos por la ley de 24 de junio de 1849, y de los demás beneficios que aseguran á las obras públicas las leyes y disposiciones generales.

16. Como garantía del uso de la autorización y del cumplimiento de las obligaciones que se le imponen, el concesionario depositará en la Caja general el 5 por 100 del presupuesto, sin que pueda llevar á cabo la expropiación ni dar principio á las obras antes que lo verifique. Este depósito deberá hacerse en metálico, ó efectos de la Deuda pública al precio de cotización, dentro de los cuatro meses siguientes á la concesión; y su importe le será devuelto al concesionario á medida que ejecute las obras, con presencia de las certificaciones trimestrales que expidirá el Ingeniero Jefe de la provincia.

17. Si no se hiciese el depósito en el plazo marcado, si las obras no principiaren ó no se terminasen en los que respectivamente señala la condición 13, ó si el concesionario faltase á alguna de las demás obligaciones que se le imponen, caducará la concesión, perdiendo aquel la fianza si ya la hubiese constituido, y quedando siempre los planos á beneficio del Estado. El Gobierno proveerá en este caso á la ejecución ó terminación de las obras, al tenor de lo dispuesto en el pliego de condiciones aprobado para el Canal de San Fernando por Real decreto de 15 de setiembre de 1848.

18. El Gobierno se reserva la facultad de disponer de las aguas sobrantes del río Esla después de cubierta la dotación de este Canal.

Madrid 6 de abril de 1859.—Aprobado por S. M.—Corvera.

Lo que se inserta en este periódico oficial para su debida publicidad. Orense 24 de abril de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

Número 251.

En la Gaceta de Madrid número 110 del miércoles 20 del actual se publica lo siguiente:

Real decreto declarando improcedente el recurso de revision interpuesto por don Manuel Gil, corista exclaustrado.

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que He venido en decretar lo siguiente:

En la instancia que por recurso de revision pende en el Consejo de Estado, entre partes, de la una don Manuel Gil, corista exclaustrado del convento de San Esteban de Salamanca, y de la otra mi Fiscal representando á la Administración, contra mi Real decreto de 30 de setiembre de 1858, que decidió el pleito seguido entre las mismas, sobre que se declarase al don Manuel Gil con derecho á percibir la pensión vitalicia concedida á los de su clase:

Visto: Vista la Real orden de 30 de junio de 1857, por la que se desestimó la reclamación de don Manuel Gil:

Vista la demanda que este entabló contra aquella disposición en 17 de agosto de 1857, en solicitud de que se le concediese la pensión de 5 rs. diarios y se le abonase el importe de los atrasos:

Visto el Real decreto de 30 de setiembre de 1858, por el que tuve á bien absolver á la Administración de la demanda interpuesta, y mandar se llevase á efecto la Real orden citada:

Visto el recurso de revision presentado en tien po por don Manuel Gil, en el

que alega: primero, que son equivocados e inexactos los fundamentos de la sentencia; y segundo, que habiendo expuesto mi Fiscal que la prueba del interesado, respecto a su impedimento físico, podía ser concluyente si hubiese demostrado que la dolencia que entonces padecía era la misma del año de 1855, época de la excomunión; y como así lo ha acreditado con las declaraciones de los facultativos, necesariamente resulta que las peticiones de las partes son idénticas, deduciendo de aquí la consecuencia de que se ha decidido sobre cosas no pedidas.

Visto el escrito de mi Fiscal, en el que reclama se desestime el expresado recurso como a todas luces improcedente:

Vistos los artículos 228 y siguientes del mismo reglamento, que determinan los casos en que ha lugar al recurso de revisión de las sentencias definitivas:

Considerando, en cuanto a la primera parte de la demanda, que aunque se supusiera ciertos los hechos que alega don Manuel Gil para impugnar los fundamentos de la sentencia, esto no le daría derecho al recurso de revisión, porque no es ninguno de los casos tasativamente señalados en que procede la admisión:

Considerando, en cuanto al segundo extremo de dicho escrito, que lo mismo cuando se accede a la demanda que cuando se absuelve de ella al demandado se provee sobre cosas pedidas:

Oído el Consejo de Estado, en sesión a que asistieron don Domingo Ruiz de la Vega, presidente, don Martín de los Heros, don Facundo Infante, don Andrés García Camilo, don Joaquín José Casaus, don Manuel Quesada, don Francisco Tames Hevia, don José Caveda, el Marqués de Someruelos, don Antonio Caballero, don Manuel de Sierra y Moya, don Francisco Luxán, don José Antonio Oláneta, don Antonio Escudero, don Diego López Ballesteros, don Florencio Rodríguez Vaamonde, el Conde de Torre-Marín, don Manuel Guzmán y Galiano y don Manuel Morúa López.

Vengo en declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por don Manuel Gil contra mi Real decreto de 30 de setiembre de 1858.

Dado en Palacio a 2 de marzo de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mí el Secretario general del Consejo de Estado, halándose celebrando audiencia pública el Consejo pleno; acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos a que se refiere, que se una a los mismos, se notifique a las partes por cédula de Ujier, y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 10 de febrero de 1859.—Juan Sanz.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 26 de abril de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guillán.

QUINTA SECCION.

ADMINISTRACION PRINCIPAL

DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

En virtud de disposiciones superiores se saca en arrendamiento público por frutos del corriente año, las fincas rústicas y urbanas que pertenecieron al Clero secular y regular, Santuarios y Hermandades, y fincas adjudicadas por débitos, por partidos judiciales; bajo los presupuestos y el pliego de condiciones que a continuación se inserta.

La subasta se celebrará el día 22 de mayo próximo a las once de su mañana en el despacho del Sr. Gobernador de la provincia, ante su autoridad, el Administrador de Propiedades y Derechos y Escribano del Juzgado de Hacienda; é

igualmente se verificará en dicho día y hora doble subasta en las Casas consistoriales de los pueblos que constituyen cabeza de partido, ante el Alcalde constitucional, Procurador síndico y fé del comprobante Escribano; quedando pendiente de aprobación de la Dirección general de Propiedades y derechos del Estado.

El remate se empezará por el orden que se figura en este anuncio; y se admitirán posturas a todos los licitadores que las presenten por cada partido.

	Núm. de fincas.	Su tipo. Rs. vn.
Partido de la Capital.	253	7,398
de Allariz.	291	10,560
de Ginzo.	755	18,311
de Ribadavia.	53	1,998
de Carballino.	179	6,515
de Bande.	134	6,686
de Celanova.	182	6,636
de Verín.	299	5,515
de Villamartin.	312	5,888
de Viana.	256	4,292
de Trives.	139	2,290

Modelo de proposición.

D. vecino de se comprometo a llevar en arrendamiento las fincas que figuran en el presupuesto formado por la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado correspondientes al partido de por la suma de reales, conformándose en un todo con el pliego de condiciones formulado para este objeto, en virtud del cual ha entregado en la Caja de depósitos de la Tesorería de esta provincia la fianza de, que previene la instrucción, según lo acredita el recibo adjunto.

Fecha y firma.

Pliego de condiciones para la subasta de arrendamiento de las fincas del Clero secular y regular, Santuarios y Hermandades y fincas adjudicadas por débitos, cuyo número y tipo se figura en el anuncio de subasta que ha de celebrarse en esta capital y partidos el día 22 del mes de mayo próximo, con sujeción a lo prescrito en la Real instrucción de 16 de junio de 1858.

1.º El remate se celebrará en el local que ocupa el despacho del Sr. Gobernador, ante su autoridad, el Administrador principal de Propiedades y Derechos del Estado y Escribano del Juzgado de Hacienda, y en las Casas consistoriales de los pueblos citados ante el Alcalde constitucional, Procurador síndico y fé de Escribano; quedando pendiente de aprobación de la Dirección general del ramo.

2.º No se admitirá postura menor que la cantidad que marcan los anuncios por arriendo anual; debiendo acompañar al pliego de proposición el recibo de la Caja de Depósitos del importe del 10 por 100 en concepto de fianza.

3.º Si las fincas tienen labores hechos y frutos pendientes el día de la adjudicación del arrendamiento, pagará el rematante a prorrata, y en metálico, el valor que a juicio de peritos se gradúe a aquellos.

4.º El rematante queda obligado al fener el contrato, a dejar las fincas en el buen estado en que se le entregan, quedando sujeto a satisfacer los daños y perjuicios ó deterioros que a juicio de peritos se notasen.

5.º Las fincas que tengan arbolado ó viñado, serán cuidadas con el mayor esmero, haciendo los labores de costumbre según el uso del país, y con la absoluta prohibición de cortar el arbolado, ni menos acotarlo, a no ser la limpia ó poda, bajo la responsabilidad consignada en la condición anterior.

6.º El arrendatario satisfará por semestres adelantados el importe del arriendo si es de 20,000 rs. inclusive en adelante, por trimestres también adelantados si ex-

cediendo de 300 rs. no llegasen a 20,000, y anualmente a su vencimiento cuando no pase de 500 rs., pero adelantando en este caso a satisfacción del Administrador principal.

7.º El arriendo se entiende por frutos del corriente año, que principiará a contarse desde 1.º de enero y concluirá en fin de diciembre.

8.º Si las fincas después de arrendarlas se enajenaren, estará obligado el comprador a respetar el año de arriendo.

9.º No se admitirán posturas a ninguno que sea deudor al Estado.

10. Los arrendatarios no tendrán derecho a pedir perdón ó rebaja, ni solicitar pagar en otros plazos ni en distinta especie que lo estipulado; el contrato ha de ser a suerte y ventura, sin opción a ser indemnizados por extinción de langosta, pedrisco u otro incidente imprevisto.

11. Si no cumplieren la obligación de pago en los términos contratados, quedarán sujetos a la acción que contra ellos intente la Administración principal y a satisfacer los daños y perjuicios a que diesen lugar. Si llegare el caso de ejecución para la cobranza, se entenderá rescindido el contrato en el mismo hecho, y se procederá a nuevo arriendo en quiebra.

12. Satisfarán de su cuenta y riesgo en la Administración principal de propiedades y derechos del Estado y en monedas corrientes de oro ó plata el importe del arriendo en los plazos marcados.

13. No sufrirán otros desembolsos que el pago de derechos a los escribanos, fees de fechos y pregoneros; siendo igualmente de su cuenta el papel que se invierte en el expediente y escritura, y las dietas de los peritos en caso de justiprecio.

14. Se admiten posturas por partidos judiciales totalizados y las generales que quieran presentar los interesados, para lo cual se hallen clasificados convenientemente en los presupuestos que rigen para la subasta.

15. No obstante haber eliminado de los actuales presupuestos las fincas enagenadas y satisfechas por los compradores, cualquiera alteración que en lo sucesivo pueda ofrecer este trabajo, sería objeto de una rectificación por parte de esta oficina con referencia a los inventarios y demás antecedentes que existen en la misma.

16. Quedan exceptuadas las casas rectoriales, huertas y otras tierras anejas a las mismas; y en el caso de que se hubieran comprendido alguna, se considerará como baja para el arrendatario, previo el expediente de instrucción.

17. Los arrendatarios no podrán utilizarse de las fincas que no consten en los inventarios, y que por consecuencia han dejado de figurar en los presupuestos; pero les serán imputadas las que además de las incluidas en ellos, resulten deber arrendarse, bien sea por descubrimiento u otro concepto. Debiendo ser consideradas como ocultas las que todavía se detentan al Estado y pertenecen única y exclusivamente al dominio de la investigación, quedan sujetos a las penas de instrucción los arrendatarios ó colonos que clandestinamente quieran aprovecharse de otras fincas que aquellas de que con referencia a los inventarios facilitará desde luego individual relación esta Administración principal.

18. Quedarán también sujetos los arrendatarios a las demás condiciones que particularmente se hallan establecidas por las leyes y adoptadas por la costumbre en la provincia, siempre que no se opongan a las contenidas en este pliego; y siendo una de ellas la de satisfacer a los arrendatarios salientes los gastos ocasionados en el cultivo de las tierras de pan llevar ó de otro fruto, queda de cuenta de los entrantes el abono de los legítimos gastos que hayan tenido en dicho cultivo, entendiéndose que éstos deberán también ejecutarlos para que las fincas no sufran menoscabo alguno, mediante a que es de su obligación el laboreo de las citadas tierras, que deberá

satisfacerse al mismo por los siguientes arrendatarios que hayan de sucederles.

Orense 26 de abril de 1859.—P. S., Manuel García.

Juzgado de 1.ª instancia de Padron.

El Sr. D. Felipe Vinas, abogado de los tribunales nacionales, caballero de la Real y distinguida Orden española de Carlos III y juez de primera instancia en la villa y partido de Padron etc.—Por el presente cito, llamo y emplazo a Manuel Alvarez Carraceda, natural de Celanova, sin liza residencia ni oficio, soltero y de 18 años de edad, para que dentro de nueve días siguientes al de la publicación é inserción de este anuncio en los Boletines oficiales, se presente en la cárcel de dicho partido a responder a los cargos que contra él resultan en la causa que por hurtos le estoy instruyendo a testimonio del que autoriza; pues que de no verificarlo en el expresado término se lo declarará contumaz rebelde, practicándose en estrados las diligencias que ocurran y le pasará el perjuicio que haya lugar. También exorto y ruego a las autoridades civiles, militares y demás de protección y seguridad pública que teniendo noticia de él se sirvan disponer la captura y conduccion con el seguro debido; y sabiendo así bien del paradero de su hermana Andrea Alvarez, tendera de quincalla ambulante, se lo informe por medio de los dependientes respectivos, concurra a dicho Juzgado a prestar declaración en el mismo procedimiento. Dado este mi segundo edicto en Padron a 19 de abril de 1859.—Felipe Vinas.—Por su mandado, José Maria Gutsand.

Idem de Ginzo de Limia.

El doctor don Luis Gomez Seara, juez de primera instancia de la villa y partido de Ginzo de Limia.—A los señores jueces de primera instancia y demás autoridades de la provincia, sirvanse saber que en la noche amaneciendo al 21 de marzo último, fueron robados de la casa de Benito Rodriguez, vecino de Chamusín en este partido, dos tocinos, un pollo, dos lacones y cosa de un terrado de patatas, franqueando la puerta a beneficio de alguna llave falsa ó ganza; y pasada la causa al promotor fiscal, emitió dictamen para que por medio del Boletín oficial de la provincia se exortase a las mismas como lo hago de parte de S. M. en cuyo Real nombre administro justicia; para que siendo habidos dichos efectos en poder de alguna persona sospechosa y la llave ó ganza, la remita con ellos a disposición de este juzgado por medio de la guardia civil, pues en hacerlo así administrarán justicia; é yo haré lo propio en casos iguales. Dado y firmado en Ginzo de Limia a 14 de abril de 1859.—Luis Gomez Seara.—De su orden, Vicente Diaz Teijeiro.

SECCION DE ANUNCIOS.

BIBLIOTECA

DE AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIONES Y CONSEJOS PROVINCIALES; ó SEA

Coleccion completa de la legislación y jurisprudencia vigentes en todos los ramos de la Administración.

Esta Biblioteca, que con sola la circulación de los Prospectos cuenta ya con más de 5,000 suscripciones, se compone de tres partes, y cada una de éstas se divide en tantos Manuales cuantos sean las materias que a las mismas corresponden. Para enterarse a fondo del plan y método que se sigue en su publicación, y de los beneficios y ventajas que la misma reporta, puede pedirse el Prospecto con sobre

A la Comisión general de Sierra.—Precios, 57.

quien inmediatamente le entregará ó remitirá gratis.

A los señores cono suscritor al que satisfaga por cada Manual 8 rs. antes de que se dé a luz. Publicado, costará 10 rs.

En prensa: Manual de Ayuntamientos.

IMPRESA DE D. CESAREO PAZ Y H.